



RESOLUCION N. 03785

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las facultades delegadas por la Resolución 01466 de 24 de mayo 2018, modificada por la Resolución 2566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 de 2006 modificado por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 de 2009, en cumplimiento con lo previsto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 959 de 2000, la Resolución 931 de 2008, el Decreto 1594 de 1984, el Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984, y;

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que los días **24 de febrero y 10 de abril del 2014**, se realizó visita técnica en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, y en virtud de ella la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de esta Secretaría, emitió el **Concepto Técnico No. 05269 del 11 de junio de 2014**, respecto de la publicidad exterior visual tipo aviso encontrada allí.

DEL AUTO DE INICIO

Que con fundamento en el **Concepto Técnico No. 05269 del 11 de junio de 2014**, se emitió el **Auto No. 03679 del 26 de junio de 2014**, la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, inicio proceso sancionatorio de carácter ambiental contra la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria de la publicidad exterior visual tipo aviso, instalada en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Que mediante oficio con radicado 2014EE110994 del 04 de julio de 2014, esta Entidad envió citación para la notificación del anterior acto administrativo, no obstante a lo anterior, y al no poder llevarse a cabo la notificación personal del mismo, este fue notificado por aviso el 16 de septiembre de 2014, con constancia de ejecutoria del 17 de septiembre de 2014, publicado en el Boletín Legal de esta Entidad el 30 de diciembre de 2014 y comunicado al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el 15 de julio de 2014.



DEL PLIEGO DE CARGOS

Que a través del **Auto No. 01877 del 30 de junio de 2015**, expedido por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), se dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Formular a la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51903932, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **BODEGA DE PINO**, donde se encuentra instalado elemento de publicidad exterior visual tipo aviso cuyos texto publicitario es “**BODEGA DE PINO**”, ubicado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de esta Ciudad, a título de dolo, el siguiente cargo, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, así:

CARGO UNICO: No dar cumplimiento presuntamente al artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, los cuales establecen los requisitos para el registro de los elementos de publicidad”.

Que esta Autoridad Ambiental mediante oficio con radicado No. 2015EE143538 del 03 de agosto de 2015, cito a la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** para realizar la respectiva notificación personal del Auto No. 01877 del 30 de junio de 2015, no obstante, como quiera que no fue posible realizar la notificación personal, esta Secretaría procedió a notificarlo por edicto fijado el 24 de septiembre de 2015 y con constancia de ejecutoria del 25 de septiembre de 2015.

DE LOS DESCARGOS

Que de acuerdo con el Artículo Tercero del **Auto No. 01877 del 30 de junio de 2015**, la investigada contaba con diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de este, para que directamente o por medio de apoderado debidamente constituido, presentara por escrito los descargos a que hubiere lugar y aportara o solicitara la práctica de las pruebas que considerara pertinentes y que fueran conducentes.

Que revisado el expediente **SDA-08-2014-3317** y el sistema de información ambiental - FOREST de la Secretaría Distrital de Ambiente, no se evidencia la presentación de descargos por parte de la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad. Así las cosas, se establece que la presunta infractora no ejerció el derecho de defensa, dado que no radicó escrito de descargos ni solicitó práctica de pruebas, dejando incólume el acto administrativo.

DE LAS PRUEBAS



Que mediante el **Auto No. 01579 del 28 de junio de 2017**, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, ordenó la apertura de la etapa probatoria dentro del Procedimiento Sancionatorio Ambiental iniciado por esta Entidad mediante **Auto No. 03679 del 26 de junio de 2014** en contra de la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, vulnerando presuntamente con esta conducta el Artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, toda vez que el aviso no cuenta con registro ante esta Secretaría.

Que esta Entidad dentro de la etapa probatoria, y a través del **Auto No. 01579 del 28 de junio de 2017**, ordenó en su Artículo Segundo, incorporar como pruebas el Concepto Técnico No. 05269 del 11 de septiembre de 2011, por ser éste un medio probatorio conducente, pertinente y necesario para demostrar la ocurrencia de los hechos constitutivos de infracción ambiental.

Que esta Autoridad Ambiental mediante oficio con radicado No. 2017EE119092 del 28 de junio de 2017, cito a la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** para realizar la respectiva notificación personal del Auto No. **01579 del 28 de junio de 2017**, no obstante, como quiera que no fue posible realizar la notificación personal, esta Secretaría procedió a notificarlo por edicto fijado el 24 de octubre de 2017 y desfijado el 30 de octubre de 2017, quedando debidamente notificado el 31 de octubre de 2017. Dicho acto administrativo se encuentra con constancia de ejecutoria del día 01 de noviembre de 2017.

Que en desarrollo de las pruebas incorporadas por el **Auto No. 01579 del 28 de junio de 2017**, ha de resaltarse que:

1. El Concepto Técnico No. 05269 del 11 de septiembre de 2011, permitió a esta entidad determinar la sanción de acuerdo con el grado de afectación paisajística.
2. Se evaluó jurídica y técnicamente todos los documentos que reposan en el Expediente SDA-08-2014-3317, emitiendo el **Informe de Criterios No. 03003 del 14 de noviembre de 2018**, en el cual se establecen los criterios para tomar una decisión de fondo respecto del proceso que nos ocupa.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE ESTA SECRETARÍA

Que una vez efectuada la revisión documental del expediente SDA-08-2014-3317, se encontró la siguiente actuación técnica por parte de esta Secretaría:

El **Concepto Técnico No. 05269 del 11 de septiembre de 2011**, junto con el registro fotográfico y las Actas de Visita de Control y Seguimiento a Elementos de Publicidad Exterior Visual del 24 de febrero de 2014 y 10 de abril de 2014, que dio origen al mencionado concepto, sirvieron de



argumento técnico para expedir el **Auto No. 03679 del 26 de junio de 2014**, por medio del cual se da inicio al proceso sancionatorio, ya que como se evidencia en el material probatorio, la investigada ha instalado Publicidad Exterior Visual tipo Aviso sin registro vigente ante esta Autoridad Ambiental, lo cual vulnera el Artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, conducta por la cual mediante el **Auto No. 01877 del 30 de junio de 2015**, se le formularon cargos a la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad.

En el Concepto Técnico No. 05269 del 11 de septiembre de 2011, se especifica en el acápite de la **“VALORACIÓN TÉCNICA”** y como infracción lo siguiente: **“(…) El aviso del establecimiento no cuenta con registro (…)”**.

Adicionalmente, el soporte técnico referido está soportado con la siguiente fotografía registrada el día **24 de febrero de 2014**, fecha en que se realizó la primera visita técnica en el establecimiento comercial ubicado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, donde se encontró el elemento de publicidad exterior visual cuyo texto anunciaba **“BODEGA DE PINO”**, sin cumplir con el registro previo ante la Secretaría Distrital de Ambiente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fuente: Concepto Técnico No. 05269 del 11 de septiembre de 2011





CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro Estado social de derecho. De la misma forma, existen en nuestro ordenamiento unas normas reguladoras ambientales que conducen a la aplicación de medidas preventivas y sancionatorias, por el incumplimiento a las regulaciones establecidas sobre la protección del ambiente y el manejo de los recursos naturales renovables en nuestro país.

Que de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Constitución Nacional contiene derechos y deberes de los ciudadanos frente a la sostenibilidad de un ambiente sano, en el artículo 79 encontramos que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” y en el artículo 80 ordena al Estado que “...deberá prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir reparación de los daños causados”. Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos, y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que esto no sea vulnerado.

Que, a su vez, el artículo 80 de la Constitución Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, en el inciso 2° del mencionado artículo, se refiere a los instrumentos represivos y establece la obligación por parte del Estado para *“imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”*.

Que igualmente, el ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral octavo el de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Consecuentes con la política pública de protección del ambiente y el contenido y alcance de las regulaciones existentes en materia de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en nuestro país, es imprescindible actuar dentro del marco de las finalidades de la función administrativa de la autoridad ambiental, a efectos de propender por el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, para velar porque se asegure el establecimiento y la operación de controles adecuados y eficaces respecto a los factores de deterioro ambiental, teniendo de presente que el desarrollo económico no se convierta en una amenaza a la preservación de los recursos naturales renovables.

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el



Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que el párrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.

Que, a su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que el artículo 9° de la Ley 1333 de 2009, estableció taxativamente las causales de cesación de procedimiento, las cuales se describen a continuación:

“ARTÍCULO 9°. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL. *Son causales de cesación del procedimiento las siguientes:*

- 1o. Muerte del investigado cuando es una persona natural.*
- 2o. Inexistencia del hecho investigado.*
- 3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.*
- 4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.*

PARÁGRAFO. *Las causales consagradas en los numerales 1o y 4o operan sin perjuicio de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere.”*

Que el artículo 23 *Ibídem*, estableció la cesación de procedimiento, en los casos en los cuales apareciera demostrado plenamente alguna de las causales señaladas en el artículo 9° de la misma ley, para lo cual se deberá expedir el acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor. La cesación de procedimiento solo se podrá declarar antes del auto de formulación de pliego de cargos, excepto en los casos de fallecimiento del infractor.

Para el caso en comento, esta Autoridad Ambiental no encuentra ninguna causal legal para que opere la cesación del procedimiento; así mismo, no se evidencia que la investigada, haya



presentado solicitud expresa de cesación de procedimiento por alguna de las causales indicadas en el artículo 9° de la Ley 1333 de 2009.

Que frente a la conducta objeto de infracción regulada en el Artículo 30 del Decreto 959 de 2000, en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, toda vez que el aviso no cuenta con registro ante esta Secretaría, es pertinente precisar que la misma es de ejecución instantánea, y por tanto, así la publicidad exterior visual exterior tipo aviso, haya sido eventualmente y posteriormente a la visita técnica llevada a cabo el 12 de noviembre de 2009, desmontada o ajustada a la normatividad ambiental, no exime de responsabilidad a la sociedad investigada. Así mismo, la solicitud y obtención posterior del registro del elemento de Publicidad Exterior Visual tipo Aviso, tampoco absuelve o exonera a la responsable de la imposición de la sanción prevista en la normatividad ambiental en lo que tiene que ver con Publicidad Exterior Visual.

Que es necesario resaltar lo establecido en el artículo 9 del Decreto 959 de 2000 ***“Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá”***, el cual indica lo siguiente:

“ARTÍCULO 9. Responsables. Son responsables por el incumplimiento de lo que aquí se reglamenta la persona natural o jurídica que elabore el aviso, el anunciante y el propietario del establecimiento o predio que coloque el aviso sin el cumplimiento de los requisitos previstos quienes se harán acreedores a las sanciones establecidas en este acuerdo”. (Resaltado fuera de texto).

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C- 595 de 2010, al analizar la asequibilidad del parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, estableció:

“Los parágrafos demandados no establecen una “presunción de responsabilidad” sino de “culpa” o “dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333).

No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales.



La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su demostración.”

Tal y como lo señala la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias, la actividad comercial de las empresas debe enmarcarse en los rangos que determine la ley, al punto que se proteja la salud y el medio ambiente. Veamos:

“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. (Subrayado fuera del texto)

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente.

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de



retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar.” (Sentencia C-254 de 1.993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).”

Que respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "...dentro de los límites del bien común...".

Que adicionalmente la Corte Constitucional en Sentencia, T- 536 del 23 de septiembre de 1992, determinó:

“...Para esta Corte, entonces, no cabe duda que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia...”

Se considera pertinente en este momento, hacer referencia a algunos criterios adicionales de la Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:

“La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.

“Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).”

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero señala:

“El medio ambiente desde el punto de constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que



entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo.”

De acuerdo a esta interpretación que hace la Corte Constitucional, todas las personas son responsables del cuidado y conservación de los recursos naturales, tomando conciencia que no se debe agotar o menoscabar la base en que se sustentan, evitando el deterioro del medio ambiente, teniendo en cuenta que no solo es un derecho disfrutar del ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional, sino que también es un deber de todos protegerlo y propender por la calidad de vida y bienestar social de las futuras generaciones para la satisfacción de sus propias necesidades, principio por el cual se da cumplimiento al concepto de desarrollo sostenible, consagrado en la Ley 99 de 1993. Así mismo hace parte de este precepto, el cumplimiento de las obligaciones y deberes con relación a las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental con respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

DEL CASO CONCRETO

Que descendiendo al caso sub examine, con fundamento en la precitada norma, es claro que la responsable del incumplimiento de las normas ambientales en materia de publicidad exterior visual está contemplado el anunciante y el propietario del establecimiento, en este caso la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, es responsable por el incumplimiento de la normatividad ambiental que regula lo pertinente a la Publicidad Exterior Visual, en los términos del Artículo 30 del Decreto 959 de 2000, en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, al no contar con registro previo ante la Secretaría Distrital de Ambiente.

FRENTE AL CARGO ÚNICO:

*“**CARGO UNICO:** No dar cumplimiento presuntamente al artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, los cuales establecen los requisitos para el registro de los elementos de publicidad”.*

De acuerdo a las consideraciones técnicas de esta Entidad, queda establecido que en el registro fotográfico que soporta el **Concepto Técnico No. 05269 del 11 de junio de 2014**, elaborado con ocasión de las visitas de control y seguimiento a elementos de publicidad exterior visual del 24 de febrero de 2014 y 10 de abril de 2014, las cuales fueron realizadas por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaria Distrital de Ambiente al establecimiento de comercio ubicado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, se encontró publicidad exterior visual tipo aviso cuyo texto anunciaba “BODEGA DE



PINO”, sin cumplir con el registro previo ante la Secretaría Distrital de Ambiente, lo cual demuestra el incumplimiento a lo dispuesto en la normatividad que rige la materia, a saber:

El **artículo 5 de la Resolución 931 de 2008**, en concordancia con el artículo 30 del Decreto 959 de 2000, dispone:

“OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO, LA ACTUALIZACIÓN O LA PRORROGA DE LA VIGENCIA DEL REGISTRO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL: (...) En consecuencia, los responsables de la publicidad exterior visual deberán presentar la solicitud de su registro ante la Secretaría Distrital de Ambiente, y obtener su registro antes de proceder a la instalación del elemento. No se podrá instalar publicidad exterior visual en el Distrito Capital sin contar con registro vigente ante la Secretaría Distrital de Ambiente (...)”. (Subrayado, fuera de texto)

Decreto 959 del 2000

“Artículo 30 (modificado por el Acuerdo 12 del 2.000). Registro: El responsable de la publicidad deberá registrarla a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a su colocación, ante el DAMA quien reglamentará y supervisará el cumplimiento de lo previsto en el presente acuerdo. (...)”

Con la infracción mencionada en el cargo único, y los demás que se detallan a continuación, se genera un riesgo potencial de afectación por cuanto se trata de un medio perceptible como lo son las unidades del paisaje, dado que al no controlar la publicidad conlleva a contaminación visual. De acuerdo con la Secretaria Distrital de Ambiente *“La colocación de elementos de publicidad exterior visual por fuera de la normativa ambiental, contamina el paisaje altera el equilibrio de los ecosistemas, el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, la seguridad vial, la calidad de vida y el desarrollo sostenible de las actuales y futuras generaciones que puedan habitar Bogotá”¹*; Otra noción que existe sobre este tema se refiere a que: *“La contaminación visual es la alteración del paisaje causada por elementos introducidos o generados por la actividad humana o de la naturaleza, que rompen el equilibrio del individuo con su medio”²*

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que teniendo en cuenta el análisis anterior, considera esta Autoridad Ambiental, que en el presente caso el cargo único atribuido a la infractora mediante el **Auto No. 01877 del 30 de junio de 2015**, prosperó teniendo en cuenta que del registro fotográfico y las visitas de control y seguimiento a elementos de publicidad exterior visual del 24 de febrero de 2014 y 10 de abril de 2014, que soportan el Concepto Técnico **05269 del 11 de junio de 2014**, se evidencia una conducta de ejecución instantánea que de acuerdo al Artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en

¹ Rodríguez G .(2008),Ciudades ambientalmente sostenibles. Bogotá, Colombia. Editorial Universidad del Rosario.

² Rodríguez G .(2008),Ciudades ambientalmente sostenibles. Bogotá, Colombia. Editorial Universidad del Rosario.



concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, es considerada y tipificada como infracción ambiental, y en consecuencia, debe ser objeto de reproche y sanción.

Que así las cosas, en el expediente obra prueba documental y técnica que da cuenta de la responsabilidad de la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en el establecimiento comercial ubicado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda esta ciudad, respecto del incumplimiento de la normatividad en materia de publicidad exterior visual, que a continuación se cita:

1. El Artículo 30 del Decreto 959 de 2000 y el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, toda vez que el elemento tipo aviso no cuenta con registro previo vigente ante esta Secretaría.

Que en concordancia con el registro fotográfico y la descripción de la publicidad exterior visual tipo aviso que es objeto de evaluación en el Concepto Técnico **05269 del 11 de junio de 2014**, se demuestra plenamente la conducta que es objeto de infracción ambiental, lo cual presume la legalidad de las actuaciones administrativas, ya que el documento técnico es idóneo para determinar la responsabilidad de la propietaria de la publicidad exterior visual tipo aviso encontrada en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, frente a la infracción cometida y el cargo único que se formuló en el **Auto No. 01877 del 30 de junio de 2015**, a la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso.

Que en este orden de ideas, para esta Autoridad Ambiental queda claro que la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, infringió los derechos colectivos de los ciudadanos y la normativa ambiental vigente, puntualmente el Artículo 30 del Decreto 959 de 2000, en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, toda vez que el aviso no cuenta con registro ante esta Secretaría, tal como se verifica en las actas de visita que hace parte del Concepto Técnico **05269 del 11 de junio de 2014**.

Que, en conclusión, es obligación de esta Secretaría Distrital de Ambiente por mandato superior, en ejercicio de la gestión asignada, mediante el cumplimiento de las funciones fijadas legalmente y en el ámbito de su competencia hacer efectivos los mandatos constitucionales y legales dentro del marco del estado de derecho y el desarrollo sostenible.

Que teniendo en cuenta que el presente proceso administrativo sancionatorio se inició el **26 de junio de 2014** con el Auto No. **03679** y en virtud de lo establecido en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, comenzó a regir el dos (2) de julio del año 2012, resulta procedente indicar que éste proceso continuará rigiéndose con el

12



Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente para la fecha en que se dio inicio al presente proceso sancionatorio.

Que del análisis técnico y del material probatorio obrante en el expediente SDA-08-2014-3317, se considera que la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, no contaba con registro vigente ante esta Secretaría, lo cual vulnera presuntamente con esta conducta el Artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, razón suficiente para que esta Autoridad Ambiental proceda a declararla responsable del cargo formulado mediante el **Auto No. 01877 del 30 de junio de 2015** y proceda a imponer una sanción, como a continuación se describe:

DE LA SANCIÓN A IMPONER

Que en consideración a los preceptos Constitucionales y Legales esta Secretaría ha dado cabal cumplimiento al debido proceso dentro del proceso sancionatorio iniciado y las decisiones tomadas tienen su fundamento legal, habiéndose cumplido los procedimientos legales instaurados en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009 y en las demás normas aplicables al caso, preservando las garantías que protegen, en este caso, a la investigada, la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, quien no desvirtuó el cargo formulado, por lo cual la Secretaría Distrital de Ambiente, está en la obligación de imponer la sanción respectiva.

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de esta acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los Actos Administrativos que expide la Autoridad Ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales.

Que esta Entidad es competente para imponer las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 según la gravedad de las infracciones debidamente comprobadas.

Que la precitada disposición, señala el tipo de sanciones a imponer al infractor de normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables. Igualmente precisa en su parágrafo primero, que la imposición de multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas ordenadas por la autoridad ambiental responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados, ni del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.



“ARTICULO 40.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (...) impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (...)”

Que el párrafo segundo del artículo 40 de la ley 1333 del 21 de Julio de 2009 determinó que el Gobierno Nacional definiría mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes donde se tendría en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor.

Que con fundamento en lo dispuesto anteriormente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010, compilado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” y en su artículo 2.2.10.1.1.1., dispuso:

“ARTÍCULO 2.2.10.1.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto señalar los criterios generales que deberán tener en cuenta las autoridades ambientales para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.”

Respecto al proceso de individualización de la sanción el Decreto 1076 de 2015 indica en su artículo 2.2.10.1.1.3., que:

“Artículo 2.2.10.1.1.3. Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción.”

Una vez agotado el trámite procesal dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y advertida la procedencia de sanción respecto a la infracción ambiental cometida por la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad; la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y



Visual de la Secretaria Distrital de Ambiente emitió el **Informe de Criterios No. 03003 del 14 de noviembre de 2018**, que desarrolla los criterios para la imposición de la sanción principal de MULTA, de conformidad con el artículo 2.2.10.1.2.1., del decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, el cual dispone:

“Artículo 2.2.10.1.2.1.- Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes criterios:

- B: Beneficio ilícito*
- α: Factor de temporalidad*
- i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo*
- A: Circunstancias agravantes y atenuantes*
- Ca: Costos asociados*
- Cs: Capacidad socioeconómica del infractor (...)*”

En cumplimiento de la prenotada normativa, a través del **Informe de Criterios No. 03003 del 14 de noviembre de 2018**, se desarrollaron cualitativa y cuantitativamente los citados criterios, de conformidad con la metodología para la tasación de multas prevista en el artículo 4° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010 el cual prevé: “Artículo 4.- Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente modelación matemática:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha \cdot r) \cdot (1 + A) + Ca] \cdot Cs$$

A continuación, se dará aplicación a la modelación matemática prevista en el artículo 4° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, de cara a los criterios para la imposición de la sanción principal de MULTA desarrollados para el presente caso respecto de la infracción ambiental cometida por la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en el **Informe de Criterios No. 03003 del 14 de noviembre de 2018**, así:

“(…)

5. CALCULO DE LA MULTA

Dando cumplimiento al artículo 4 de la Resolución MAVDT 2086 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y habiendo adelantado la metodología para la tasación de multa, se da evaluación a la siguiente modelación matemática:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha \cdot r) \cdot (1 + A) + Ca] \cdot Cs$$

Beneficio ilícito (B)	\$ 238.712
-----------------------	------------



Temporalidad (α)	1
Grado de afectación ambiental y/o riesgo (i)	\$34'468.397
Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)	0.
Costos Asociados (Ca)	\$ 0
Capacidad Socioeconómica (Cs)	0,03
Multa	\$1.272.764

$$\text{Multa} = \$238.712 + [(1 * \$34'468.397) \times (1+0) + 0] * 0,03$$

Multa = \$ 1.272.764 UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE.

(...)"

Que atendiendo el desarrollo del modelo matemático antecedido, al igual que las conclusiones del **Informe de Criterios No. 03003 del 14 de noviembre de 2018**, una vez aplicados los criterios establecidos en la Resolución 2086 del 2010 para el cálculo de la multa del proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra de la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, mediante **Auto No. 03679 del 26 de junio de 2014**, este Despacho encuentra procedente imponer como sanción principal una multa por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$1.272.764)**, como consecuencia de encontrarla responsable ambientalmente del cargo único formulado en el **Auto 01877 del 30 de junio de 2015**.

Que la sanción a imponer mediante la presente Resolución no exonera a la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda esta ciudad, de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

De otra parte, el inciso 3° del artículo 56 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, determina que las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales; razón por la cual en la parte resolutive del presente acto administrativo se oficiará al Procurador Judicial de Asuntos Ambientales y Agrarios, informándole



la terminación del presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad.

COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

Que el artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Honorable Concejo de Bogotá, dispuso transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera.

Que el artículo 5° del Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que el mismo artículo en el literal l) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1° de la Resolución 01466 de 24 de mayo 2018, modificada por la Resolución 2566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, el Secretario Distrital de Ambiente delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de *“Expedir los actos administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios.”*

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar responsable ambientalmente a la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, por no contar con registro previo ante la Secretaría

17



Distrital de Ambiente, infringiendo con ello lo establecido en el Artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, conforme el cargo único endilgado, y a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, imponer a la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en calidad de propietaria del elemento de publicidad exterior tipo aviso, instalado en la Avenida 1 de mayo No. 38 -22 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, la **SANCIÓN** de **MULTA** por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$1.272.764).**

Parágrafo Primero. La multa anteriormente fijada, se deberá cancelar en el término de quince **(15)** días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, a órdenes de la Secretaria Distrital de Ambiente (Fondo de Financiación del Plan de Gestión Ambiental), Concepto M – 05-550 otros, en la Tesorería Distrital, Ventanilla Número 2, ubicada en el Supercade de la Carrera 30 con Calle 26 y previo diligenciamiento del formato para el Recaudo de Conceptos Varios, disponible en la Sede de la Entidad, ubicada en la Carrera 14 No. 54 - 38. Una vez efectuado el pago se deberá a llegar a esta Secretaría, copia del recibo expedido con destino al expediente SDA-08-2014-3317.

Parágrafo segundo. Si la citada obligada al pago de la multa no diera cumplimiento a lo ordenado, dicha multa presta merito ejecutivo y por tanto, se hará efectiva por medio del procedimiento de jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo tercero. El **Informe Técnico de Criterios No. 03003 del 14 de noviembre de 2018**, mediante el cual se determinó y señaló como sanción principal la multa señalada en el presente artículo, hace parte integral de este Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente Acto Administrativo, hágase entrega en dicha diligencia el Informe Técnico de Criterios No. **03003 del 14 de noviembre de 2018**, a la señora **MARIELA VIVAS HERNANDEZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.903.932, en la Calle 26 Sur No. 38 – 22 de esta Ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Al momento de la notificación del presente acto administrativo, deberá entregarse a la infractora o a su apoderado debidamente constituido, respectivamente, copia simple del Informe Técnico de Criterios **No. 03003 del 14 de noviembre de 2018**, el que únicamente liquida y motiva la imposición de sanción, en cumplimiento del artículo 3 del decreto 3638 de 2010, compilado en el decreto 1076 de 2015.



ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar la presente Resolución a la Subdirección Financiera de la Dirección de Gestión Corporativa de esta Secretaría para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo señalado en el memorando 005 del 14 de marzo de 2013 emitido por el mismo Ente de Control enunciado y su instructivo.

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga la Entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Reportar la presente sanción una vez se encuentre ejecutoriada, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado del RUIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos legales contemplados en los Artículos 50, 51 y 52 del Decreto 01 de 1984, de conformidad con lo expuesto en el Artículo 30 de la ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de noviembre del año 2018

CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

DIANA PAOLA FLOREZ MORALES C.C: 1073153756 T.P: N/A

CONTRATO
CPS: 20180882 DE FECHA EJECUCION: 15/11/2018
2018

Revisó:

LUZ AMANDA HERNANDEZ PUERTO C.C: 23856145 T.P: N/A

CONTRATO
CPS: 20180430 DE FECHA EJECUCION: 20/11/2018
2018

Aprobó:

19



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

Firmó:

CARMEN LUCIA SANCHEZ
AVELLANEDA

C.C: 35503317

T.P:

N/A

CPS: FUNCIONARIO FECHA
EJECUCION:

28/11/2018

Expediente: SDA-08-2014-3317